



Sr. Estella Hoyos, Presidente en
Funciones y Ponente

Sr. Fernández Costales, Consejero
Sr. Pérez Solano, Consejero
Sr. Quijano González, Consejero
Sr. Madrid López, Consejero
Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 19 de julio de 2007, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx, en nombre y representación de su hijo ccccc, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente*

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 21 de junio de 2007 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx, en nombre y representación de su hijo ccccc, debido a los daños sufridos en un accidente escolar.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 25 de junio de 2007, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 605/2007, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Estella Hoyos.

Primero.- D. xxxxx, en nombre y representación de su hijo ccccc, de 4 años de edad, presenta una solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial, con fecha 22 de marzo de 2007, debido a los daños sufridos por éste en un accidente escolar. Manifiesta que: "Con fecha 8 de marzo de 2007 a las 12.00 h, en el centro CEIP xxxx de xxxxx, durante el recreo hubo un



forcejeo de varios niños y mi hijo en el patio del colegio, produciéndose una caída y golpeándose la cara contra el cemento, rompiéndose la montura de las gafas y rayándose el cristal graduado. No se produjo ningún tipo de lesión grave, sólo pequeños rasguños sin necesidad de asistencia médica. Creo que es un accidente que no es fácil de evitar, ya que se produjo en el patio del colegio, pero creo que el personal es insuficiente para el control de tantos niños, pudiendo solucionarse contratando personal de apoyo para estar más vigilados”.

Solicita como indemnización la cantidad de 228,98 euros correspondiente a las gafas (montura y cristales).

Acompaña a su reclamación:

1.- Fotocopia compulsada del libro de familia para acreditar la representación que ostenta sobre el menor y título de familia numerosa.

2.- Factura de tttt por los gastos de montura y cristales de gafas que asciende a 228,98 euros.

Segundo.- Consta en el expediente la comunicación del accidente escolar, de fecha 22 de marzo de 2007, firmada por el director del centro escolar CEIP “xxxx” de xxxxx en el que señala que estando jugando el alumno cccc “en el patio, en el recreo con sus compañeros, uno de los niños le empujó cayéndose en el suelo y debido al golpe sufrido en la cara se le rompieron las gafas”.

Tercero.- Con fecha 20 de abril de 2007 se solicita informe al director del centro para que aclare si el accidente pudo deberse a una falta de vigilancia en el centro.

Cuarto.- El 26 de abril de 2007 se emite informe por el director del colegio, en el que manifiesta que: “En el momento de producirse el accidente el patio del recreo estaba vigilado por el profesorado correspondiente, cuyo número es suficiente para atender a todo el alumnado del centro, y que no hubo negligencia. El accidente se produjo durante el normal desarrollo del juego de los niños, que, en este caso, provocó la rotura de las gafas”.



Quinto.- Con fecha 3 de mayo de 2007, notificado el día 8, se concede trámite de audiencia al padre del menor, éste no presenta alegaciones.

Sexto.- Con fecha 1 de junio de 2007, se formula propuesta de orden en el sentido de que procede desestimar la reclamación planteada.

Séptimo.- El 6 de junio de 2007, la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación informa favorablemente sobre la propuesta de orden desestimatoria.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado e), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

3ª.- Concurren en la parte reclamante los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Consejero de Educación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.



4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina del Consejo de Estado así como la de este Consejo Consultivo, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.



5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de daños y perjuicios formulada por D. xxxxx, en nombre y representación de su hijo ccccc, debido a los daños sufridos por éste en un accidente escolar.

El interesado ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Los hechos tienen lugar el 8 de marzo de 2007 y la reclamación de responsabilidad patrimonial está fechada el 22 de marzo de 2007, por lo tanto entendemos que se presentó dentro del plazo de un año.

6ª.- En cuanto al fondo de la cuestión planteada, tanto el Consejo de Estado como el Consejo Consultivo de Castilla y León, han mantenido reiteradamente que el hecho de que la responsabilidad de la Administración sea objetiva, no implica que la misma deba responder necesariamente de todos los daños que puedan sufrir los alumnos en centros públicos. Para que proceda la responsabilidad patrimonial, deberán darse los requisitos que la caracterizan, legalmente establecidos en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que deben analizarse atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso.

En este mismo sentido, el Tribunal Supremo ha declarado (Sentencia de 5 de junio de 1998) que “la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”.

También conviene tomar en consideración lo establecido en la Sentencia del mismo Tribunal de 13 de noviembre de 1997, en la que se señala que “aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean



consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquella”.

Por lo tanto, la responsabilidad de la Administración procederá en aquellos casos en que los daños sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, no bastando a estos efectos que los daños aparezcan con motivo u ocasión de la prestación de dichos servicios públicos.

En el caso que nos ocupa, tal y como se deduce de los informes del director del centro educativo, el daño aducido no guarda relación con el funcionamiento del servicio público educativo, ya que el accidente se produjo no durante la realización de un concreto ejercicio o actividad ordenada por algún profesor que comportase un riesgo significativo para los escolares –supuesto en el que existe un especial deber de cuidado–, sino cuando el menor se encontraba en el recreo jugando en el patio del colegio y por parte de un compañero sufrió un empujón y al caerse al suelo se le rompieron las gafas. El accidente se produjo sin ninguna intencionalidad por parte del alumno que causó el empujón. Por otra parte, en el informe del director del centro se pone de manifiesto que en el momento de producirse el accidente el patio del recreo estaba vigilado por el profesorado correspondiente, cuyo número es suficiente para atender a todo el alumnado del centro, y que no hubo negligencia. El accidente se produjo durante el normal desarrollo del juego de los niños, que, en este caso, provocó la rotura de las gafas. No se puede hablar de culpa *in vigilando* puesto que los hechos ocurrieron de un modo totalmente fortuito, imprevisible e inevitable, por lo que no hay conexión entre el daño causado y el funcionamiento del servicio público. Es cierto que el accidente se produjo en el recinto del centro educativo, pero no a consecuencia del funcionamiento de la Administración Educativa.

En el presente suceso concurre lo que se ha venido denominando por la doctrina y la jurisprudencia el *riesgo general de la vida*. Este criterio negativo de imputación objetiva a la Administración de un cierto resultado dañoso, aunque no está expresamente establecido por la ley, se infiere de nuestro global sistema de responsabilidad extracontractual. En este sentido procede citar las Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero, 28 de marzo y 2 de junio de 2000, entre otras.



De acuerdo con este criterio, se trata de negar responsabilidad por aquellos hechos dañosos que el perjudicado tiene el deber natural y social de asumir como una incidencia normal y esperable en el natural acontecer de su existencia. Se trata, en definitiva, de una eventualidad en la que, por las circunstancias en que se produjo, no se aprecia la existencia de un título de imputación adecuado y suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica.

En definitiva, este Consejo Consultivo comparte la propuesta desestimatoria, ya que los hechos ocurridos constituyen riesgos propios e inherentes al desarrollo de la actividad escolar.

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx, en nombre y representación de su hijo ccccc, debido a los daños sufridos en un accidente escolar.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.